



## Consejo Económico y Social

Distr. general  
14 de diciembre de 2009  
Español  
Original: inglés

---

### Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

54º período de sesiones

1º a 12 de marzo de 2010

Tema 3 a) del programa provisional\*

**Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”: consecución de los objetivos estratégicos, adopción de medidas en las esferas de especial preocupación y medidas e iniciativas ulteriores: examen de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones y su contribución a formular una perspectiva de género para la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio**

### **Declaración presentada por MADRE, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social**

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

---

\* E/CN.6/2010/1.



## **Declaración**

1. MADRE es una organización internacional especializada en los derechos humanos de la mujer que trabaja para promover un mundo en el que todas las personas disfruten la gama más amplia de derechos humanos individuales y colectivos; en el que los recursos se compartan de una manera equitativa y sostenible; en el que las mujeres participen eficazmente en todos los aspectos de la sociedad; y en el que las personas influyan de forma significativa en las decisiones que afectan a sus vidas. MADRE trabaja en una amplia gama de cuestiones que afectan a las mujeres, incluida la violencia.

2. La reducción de la violencia contra la mujer debe considerarse como un indicador para la realización del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio, relativo a la promoción de la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. En la fecha descriptiva de las Naciones Unidas sobre el tercer Objetivo se señala que, pese a algunos logros, la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar los Objetivos<sup>1</sup>. Según la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, la función de la mujer como proveedora de alimentos y protectora de su familia y su carencia general de bienes y de derechos laborales, la hacen particularmente vulnerable a la violencia. La desigualdad entre los géneros perpetúa la violencia contra las mujeres y obstaculiza las posibilidades de la mujer de avanzar en educación y oportunidades de empleo, lo que a su vez intensifica las desigualdades.

3. Los Estados tienen la obligación de promover la igualdad de facto entre los hombres y las mujeres, así como de proveer un marco jurídico para la protección de los derechos humanos de la mujer, y la prevención de la violencia. El estudio del Secretario General sobre la violencia contra la mujer concluye que la responsabilidad de los Estados no se limita a ocuparse directamente de los actos de violencia contra la mujer, sino que también comprende “el descubrimiento de las pautas de desigualdad que pueden desembocar en actos de violencia y la adopción de medidas para corregirlas”<sup>2</sup>.

4. Los Estados deberían ocuparse de la violencia contra la mujer y armonizar su legislación nacional con el derecho y las normas internacionales aplicando estrategias preventivas, poniendo fin a la impunidad, iniciando o intensificando la reunión fidedigna de datos y ratificando sin reservas la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo.

## **Estrategias preventivas**

5. En 2007, reconociendo la creciente epidemia de violencia contra las mujeres, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recomendó que los Estados que adoptaran “leyes y otras medidas para combatir la violencia contra las mujeres, en el marco de los planes de adopción de medidas para prevenir ese tipo de violencia, incluida la violencia doméstica”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Véase *End Poverty 2015, Millennium Development Goals fact sheet*, disponible en <http://www.un.org/millenniumgoals/>.

<sup>2</sup> Véase A/61/122 y Add.1 y Add.1/Corr.1.

<sup>3</sup> Véase CAT/C/CR/33/2, conclusiones y recomendaciones (Grecia, noviembre 2004).

6. Sin embargo, por lo general, los legisladores siguen sin asignar prioridad a los patrones y las prácticas cada vez más frecuentes de violencia contra la mujer. Las leyes y políticas mínimas que sí existen sobre la violencia contra la mujer no se hacen cumplir eficazmente debido a la falta de concienciación y a normas culturales que permiten o fomentan el abuso de los derechos humanos de las mujeres. En mayo de 2009, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer declaró: “los gobiernos y las instituciones internacionales han respondido a la violencia contra la mujer en forma fragmentaria y aislada de las preocupaciones más generales sobre los derechos y la igualdad de la mujer”<sup>4</sup>.

7. Los Estados deberían aprobar planes de acción nacional coherentes para la eliminación de la violencia contra la mujer que incluyan medidas jurídicas, programas de servicios, reparación y estrategias preventivas. Los Estados deben fomentar la participación colaboradora con el sector civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas, los abogados, los educadores y los defensores, tanto en la formulación de un plan nacional como en su aplicación estratégica. Los objetivos de prevención se cumplen mejor mediante un enfoque comunitario coordinado que reúna sistemas sociales, como el sistema jurídico (aplicación de la ley, tribunales penales y civiles), con programas sociales y de promoción (albergues, colegios, entidades de seguridad pública y educación).

8. Además, a los funcionarios encargados de la aplicación de esos programas y políticas, incluidos los funcionarios del cuerpo de policía, los establecimientos penitenciarios y los servicios de inmigración, el personal judicial y médico, los trabajadores sociales y los educadores, se les debe dar una capacitación con perspectiva de género adecuada, que incluya las causas, las consecuencias, las modalidades y las ramificaciones jurídicas de la violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben educar a los miembros de la sociedad sobre la justicia para la mujer y el acceso a ella, e incluir a las mujeres en la formulación de todas las estrategias de concienciación y prevención.

9. Los Estados deberían asignar prioridad a la prevención de la violencia contra la mujer en las políticas y los programas nacionales; dar capacitación con perspectiva de género a todos los funcionarios responsables de la aplicación de políticas y programas que aborden la violencia contra la mujer; iniciar o fortalecer campañas de concienciación y prevención que incorporen los puntos de vista de las mujeres.

### **Poner fin a la impunidad**

10. Cuando los Estados no llevan a los perpetradores ante la justicia y cuando la sociedad aprueba explícita o tácitamente este tipo de violencia, la impunidad no sólo alienta que se cometan más abusos sino que normaliza la violencia basada en el género. Sin rendición de cuentas, las mujeres corren aún más peligro. Además, en la medida en que se intensifican las desigualdades entre los géneros, las mujeres dejan de confiar en el sistema de justicia.

11. Garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres exige algo más que endurecer las sanciones que les imponen. El Estado debe actuar con la diligencia debida para prevenir la violencia contra la mujer adoptando medidas efectivas que garanticen una investigación completa y oportuna,

<sup>4</sup> A/HRC/11/6, párr. 23.

el enjuiciamiento y el castigo de los responsables, y el acceso de las víctimas a reparación. La norma de diligencia debida se enuncia con claridad en la recomendación general núm. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que dice: “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”. Además, en 2007 el Comité contra la Tortura dejó en claro, en el comentario general núm. 2, que los Estados deben ejercer la diligencia debida para impedir los actos de violencia basados en el género, e investigar, enjuiciar y castigar a quienes los perpetran.

12. El Estado también debe examinar, revisar y eliminar las leyes discriminatorias contra la mujer. En situaciones de conflicto, después de un conflicto o cuando se producen desplazamientos internos, circunstancias en que las mujeres son particularmente vulnerables a la violencia, se deben adoptar medidas de protección adicionales. Además, las mujeres afectadas por estas situaciones deben participar en todas las etapas de la planificación, como se refleja en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000), 1880 (2009), 1888 (2009) y 1889 (2009)<sup>5</sup>.

13. Los Estados deberían evaluar periódicamente las leyes, las políticas y los programas actuales que abordan la violencia contra la mujer; evaluar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales; abolir las leyes y prácticas que discriminan contra la mujer; y aplicar un marco jurídico y de políticas que garantice la diligencia debida y fomente la protección y promoción plenas de los derechos humanos de las mujeres.

### **Investigación y recopilación de datos**

14. Aunque la violencia contra la mujer ha obtenido mayor visibilidad y más atención de los gobiernos, faltan datos confiables sobre sus causas y consecuencias, y medidas que aborden las causas profundas de la violencia o cuestionen las normas culturales que fomentan la institucionalización de actos como la violación y la violencia doméstica. Los órganos creados en virtud de tratados han insistido repetidamente en la importancia de que los Estados instituyan la recopilación sistemática de datos, no solo sobre la violencia contra la mujer sino también datos generales desglosados por sexo. Estos datos son cruciales para determinar estrategias efectivas encaminadas a impedir y reparar la violencia contra la mujer. Si no existen datos confiables, los pocos recursos asignados para abordar la violencia contra las mujeres corren el riesgo de desperdiciarse en programas con poco o nulo impacto.

15. El estudio del Secretario General sobre la violencia contra la mujer<sup>2</sup> pone de relieve la obligación de los Estados de asegurar la reunión y publicación sistemáticas de datos, inclusive mediante el apoyo a las organizaciones no gubernamentales, los académicos y otros actores dedicados a la investigación. Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 y todas

---

<sup>5</sup> Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad, que reafirma “el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y [subraya] la importancia de que participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad” (reafirmado también en las resoluciones 1880 (2009), 1888 (2009) y 1889 (2009)).

las conferencias de examen, las organizaciones no gubernamentales han estado pidiendo a los gobiernos que promuevan la reunión de datos más amplios y precisos. El Secretario General también recomendó en el mismo informe, que la reunión de datos sobre la violencia contra la mujer se hiciera “en consulta con una amplia gama de interesados, en particular los proveedores de datos, los promotores de la causa de la mujer y los organismos que prestan servicios a las mujeres, los gobernantes, los legisladores y los investigadores”.

16. Las formas de violencia contra la mujer que menos se han documentado incluyen el feminicidio; la violencia sexual contra la mujer en los conflictos armados y las situaciones posteriores a los conflictos; la trata de mujeres con fines de explotación sexual y de otra índole; y los delitos motivados por prejuicios<sup>2</sup>. Además, pocos estudios han evaluado la efectividad de medidas preventivas como las órdenes de protección y los arrestos obligatorios en situaciones de violencia doméstica.

17. Los Estados deberían dar fuerza de ley a la reunión sistemática de datos, desglosados por sexo y otros factores pertinentes como edad, raza, origen étnico y condición jurídica indígena<sup>6</sup> que documenten los casos y la frecuencia de todas las formas de violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias; evaluar la eficacia de las medidas encaminadas a impedir y reparar la violencia contra la mujer; y promover la investigación, la recopilación sistemática de datos y el análisis en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

#### **Ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer**

18. Los derechos de las mujeres están específicamente formulados en los tratados internacionales y regionales, en particular en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha indicado claramente que la violencia basada en el género puede incumplir ciertas disposiciones. La Convención obliga a los Estados Partes a proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social.

19. Los Estados deberían ratificar sin reservas la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo; los Estados que han ratificado la Convención con reservas las deberían retirar; y los Estados deberían modificar todas las leyes que discriminen contra la mujer y aplicar la Plataforma de Acción de Beijing, de conformidad tanto con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como con su Protocolo Facultativo.

---

<sup>6</sup> Véase Mairin Iwanka Raya: *Mujeres Indígenas Confrontan la Violencia, informe complementario al estudio sobre violencia contra las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas* (2006).